

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	LILIANA PAREDES LEAL
DEMANDADO	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-019-2019-00439-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, causación, principio de la condición más beneficiosa.
DECISIÓN	Confirma absolución

Medellín, veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **LILIANA PAREDES LEAL** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 002**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 11 de julio de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora LILIANA PAREDES LEAL y el señor CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO eran esposos, y este último falleció el 14 de abril de 2015, momento para el cual se encontraba afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A.

Que al creer reunidos los requisitos legales para acceder a una pensión de sobrevivientes, la actora elevó solicitud en tal sentido ante la AFP PROTECCIÓN S.A., el día 14 de marzo de 2016, pero dicho fondo mediante comunicado del 16 de junio de 2016, negó la prestación económica deprecada, bajo el argumento que el afiliado fallecido no registraba el mínimo de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al deceso para dejar causado el derecho pensional a favor de sus beneficiarios, desconociéndose en esta negativa, que el causante registraba en toda su vida un total de 748 semanas, de las cuales 541 semanas estaban cotizadas antes del 31 de marzo de 1994.

Finalmente aduce el escrito introductorio, que el fondo privado le reconoció en subsidio a la demandante una devolución de saldos por valor de \$46.268.765, dinero que le exigen devolver para proceder con un nuevo estudio del derecho pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare que la señora LILIANA PAREDES LEAL le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO desde el 14 de abril de 2015 y que, a consecuencia, se condene a la AFP PROTECCIÓN

S.A. al pago de la prestación retroactiva a dicha fecha, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Mediante proveído del 15 de diciembre de 2021, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín dio por NO CONTESTADA la demanda, según consta en el archivo PDF N° 07 incorporado al expediente digital.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 11 de julio de 2022, ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN S.A. de la pretensión de PENSION DE SOBREVIVIENTES promovida en su contra por la señora LILIANA PAREDES LEAL, en ocasión del fallecimiento del afiliado CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO, absteniéndose de proferir condena en costas en la primera instancia.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que el causante no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios, pues al momento del fallecimiento no tenía en su haber 50 cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores al deceso, tal como lo exige el art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y en virtud del principio de la condición más beneficiosa no cumple el requisito de la temporalidad, es decir, el haber ocurrido el fallecimiento entre los años 2003 y 2006, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que solo permite la remisión a la ley inmediatamente anterior, y en virtud de la jurisprudencia constitucional, que sí permite doble salto normativo, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, la actora no logró superar el test de procedencia.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El apoderado judicial de la demandante refiere no estar de acuerdo con la sentencia, pues, en su sentir, la demandante sí acreditó su calidad de

beneficiaria de la pensión que reclama, al ser la esposa legítima del causante con quien procreó 2 hijos, conformó un hogar, y sostuvo una convivencia continua e ininterrumpida.

Expone el recurrente que el causante dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios, pues en su historia laboral se evidencian unos faltantes en las cotizaciones por los años 2004, 2005, 2006, y 2007, periodos en que su empleador lo afilió como independiente, y deben ser tenidos en cuenta como mora patronal, solicitándole a este tribunal de distrito judicial se ordene a la AFP PROTECCIÓN S.A. la expedición de una historia laboral más actualizada, para corroborar que pasó con los periodos en mora referidos, en aplicación de las facultades extra y ultra petita.

También expone que la demandante cumple con las exigencias del test de procedibilidad de la Corte Constitucional, lo cual debe verificarse por el en segunda instancia, en consideración a las precarias condiciones de salud de la demandante, quien es una persona en silla de ruedas que sufre de una artrosis degenerativa, máxime que en aquellos asuntos donde está inmerso el principio de favorabilidad contenido en el art. 53 de la CN, la jurisprudencia que debe adoptarse para resolver la litis es la de la Corte Constitucional, no así la del órgano de cierre.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose en la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, a través de los cuales solicita se confirme la sentencia absolutoria de primer grado, argumentando para ello que el afiliado Marines Castro, falleció en fecha abril 14 de 2015, sin que hubiera cotizado ninguna semana dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del deceso, razón por la cual Protección S.A., en el mes de agosto de 2016, reconoce a la señora Liliana Paredes Leal, una devolución de saldos por valor de \$49.558.300, como consecuencia de la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes realizada por la citada señora ante Protección S.A., en fecha abril 18 de 2016, siendo la norma aplicable al caso concreto los

artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Y tampoco se encuentra causada la prestación económica bajo el principio de la condición más beneficiosa a la luz de la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia (sentencia con radicación 45.262 del 25 de enero de 2017), pues resulta requisito sine qua non que el fallecimiento se hubiese dado entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, **I)** si el afiliado fallecido CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de su beneficiaria, y **II)** solo en caso afirmativo, pasará la sala a establecer la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, la procedencia de los intereses moratorios.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- i)* Que según registro civil de defunción (fls. 16 del archivo PDF 01), el señor CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO falleció el día

14 de abril de 2015 y, conforme a registro civil de matrimonio (fls. 14 y 15 del archivo PDF 01) sin nota marginal sobre eventual liquidación de sociedad conyugal o cesación de efectos civiles, se constata que el causante y la señora LILIANA PAREDES LEAL contrajeron matrimonio católico el 19 de julio de 1980.

- ii) Que demandante LILIANA PAREDES LEAL solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la AFP PROTECCIÓN S.A., el día 14 de marzo de 2016 (fls. 11 del archivo PDF 01), y dicho fondo, a través del comunicado del 16 de junio de 2016 negó el reconocimiento de la prestación (fls. 12 y 13 del archivo PDF N° 01), argumentado insuficiencia de semanas cotizadas, pues de las 679,85 semanas que registra en toda su vida laboral 0 semanas se encontraban cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, incumpliendo la exigencia contenida en el art. 12 de la Ley 797 de 2003; en subsidio a la pretensión principal la AFP accionada dispuso a favor de la actora la suma de \$46.268.765 a título de devolución de saldos.
- iii) Se encuentra asimismo acreditado que el afiliado fallecido CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO dejó un total de 679,85 semanas cotizadas, de las cuales 542 semanas se encontraban cotizadas al 30 de junio de 1992, según se advierte en el certificado expedido por la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, visible a folios 68 al 71 del archivo PDF N° 01.

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si este afiliado dejó causado o no el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003 por remisión que hiciere el 73 de la misma Ley 100 de 1993, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado MARINES CASTRO, veamos:

*“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”*

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la certificación y/o historia laboral aportada con la demanda (fls. 21 al 22 del archivo PDF N° 01),

encontrando que el señor MARINES CASTRO, al momento del fallecimiento (14 de abril de 2015) registraba cero (0) semanas cotizadas entre el 14 de abril de 2012 y el 14 de abril de 2015, esto es, en los 3 años anteriores a su deceso, pues su última cotización databa del mes de diciembre de 2007.

No obstante, en el mes de agosto de 2016, fecha para la cual se había proferido la negativa pensional por parte del fondo privado y se había concedido la devolución de saldos a favor de la demandante, se cotizaron a favor de este afiliado fallecido un total de 51,42 semanas, las cuales corresponden a todo el año 2014, veamos:

200712	19/12/2007	\$ 602.300,00	30	\$ 62.933,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.012,00	\$ 7.151,00	0
	27/05/2016	\$ 0,00	0	\$ 43.770.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0
201605	23/06/2016	\$ 0,00	0	\$ 2.217.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0
201401	03/08/2016	\$ 589.500,00	30	\$ 23.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.413,00	\$ 0,00	\$ 2.406,00	\$ 3.610,00	0
201402	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 27.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.809,00	\$ 0,00	\$ 2.893,00	\$ 4.340,00	0
201403	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 29.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.809,00	\$ 0,00	\$ 3.075,00	\$ 4.613,00	0
201404	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 31.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.409,00	\$ 0,00	\$ 3.299,00	\$ 4.948,00	0
201405	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 33.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.209,00	\$ 0,00	\$ 3.497,00	\$ 5.246,00	0
201406	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 35.262,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.209,00	\$ 0,00	\$ 3.679,00	\$ 5.519,00	0
201407	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 37.244,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.909,00	\$ 0,00	\$ 3.886,00	\$ 5.830,00	0
201408	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 39.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.809,00	\$ 0,00	\$ 4.077,00	\$ 6.115,00	0
201409	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 40.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.709,00	\$ 0,00	\$ 4.275,00	\$ 6.413,00	0
201410	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 43.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.309,00	\$ 0,00	\$ 4.490,00	\$ 6.736,00	0
201411	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 44.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.409,00	\$ 0,00	\$ 4.664,00	\$ 6.996,00	0
201412	03/08/2016	\$ 616.000,00	30	\$ 44.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.409,00	\$ 0,00	\$ 4.664,00	\$ 6.996,00	0
TOTAL PESOS				\$ 47.426.443,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 531.562,00	\$ 0,00	\$ 207.003,00	\$ 183.148,00	
TOTAL CUOTAS				995,92	0,00	0,00	11,16	0,00	4,35	3,85	1.245,12
TOTAL SEMANAS											126,85

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 24 de abril de 2018

Y si bien la parte no está solicitando el reconocimiento pensional con fundamento en las semanas cotizadas con posterioridad al fallecimiento del afiliado, la Sala tampoco las tendrá en cuenta para efectos pensionales, pues no se tiene certeza que las mismas correspondan a una verdadera relación laboral subordinada, pues frente a esta situación nada se dijo en el escrito introductorio, y tampoco existe un acervo probatorio idóneo que así permita concluirlo. Y por ello solo serán tenidas en cuenta las cotizaciones realizadas hasta el mes de diciembre de 2007, que según la AFP accionada ascendieron a 679,85 y que fueron el punto de partida para la devolución de saldos.

En ese orden de ideas, podría decirse, en principio, que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se

causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa analizado por el a quo en la sentencia objeto de consulta.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido. Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres (3) años, a más de tornarse razonable y

proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar una norma distinta a la inmediatamente anterior, dado que el causante falleció en fecha posterior al 29 de enero de 2006.

No obstante, y si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial que eventualmente podría aplicarse al presente asunto, toda vez que del certificado expedido por la oficina de bonos pensionales del ministerio de hacienda y crédito público, el afiliado fallecido al 30 de junio de 1992 (fecha de referencia para la liquidación del bono pensional) ya tenía en su haber 3.796 días, equivalentes a 542 semanas, es decir, superaba con creces el mínimo de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994, para dejar causada una pensión de sobrevivientes bajo el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, veamos:

INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN CERTIFICADA POR LA AFP					
DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	CENTRO
LIQUIDACION BONO					
Tipo Bono	A	Modalidad	2	Versión	1
Fecha Base (DD/MM/AAAA)	30/06/1992	Tiempo Válido Para Bono (sin traslapes)	3,796(días) , 542(semanas)	Tiempo Total Trabajado	3,796
Salario Base	\$70,260	Empleadores Salario Base	BOMBEROS VOLUNTARIOS		
Fecha Corte (DD/MM/AAAA)	06/07/1994	Fecha Redención Normal (DD/MM/AAAA)	27/11/2018	Tasa Interes (%)	3.0
Fecha Siniestro(DD/MM/AAAA)	14/04/2015	Causal Redención	Muerte		
Valor Bruto A F.C.	\$4,415,988	Valor Emi, Reco o Red en Versión Ant. a F.C.		Valor Neto Versión A F.C.	\$4,415,988
Valor Cupones Emitidos por la Nación a F.E.	\$43,770,000				

No obstante, mediante la sentencia **SU-005/18**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por lo que se establecieron CINCO (5) CONDICIONES para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición: Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.

Segunda condición: Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante **afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.**

Tercera condición: Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.

Cuarta condición: Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

Quinta condición: Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Analizadas por la Sala las anteriores condiciones, se considera que la demandante LILIANA PAREDES LEAL apenas cumple con la PRIMERA, SEGUNDA, y QUINTA condición del TEST DE PROCEDENCIA aludido, pues al contar en la actualidad con más de 61 años de edad, detenta el estatus de “adulto mayor”, quien conforme a la jurisprudencia constitucional (sentencias T-339 de 2017, T-598 de 2017, y T-013 de 2020), es un sujeto de especial protección constitucional.

La SEGUNDA condición se logró probar con la declaración del testigo JAIME LAUREANO MARTÍNEZ RONDÓN¹, quien le puso en conocimiento al despacho que era el causante la persona que sostenía económicamente el hogar producto de su trabajo como empleado en la empresa “LENNER ALUMINIO”.

Y frente a la QUINTA CONDICIÓN, resulta evidente para la Sala que la señora PAREDES LEAL reclamó su derecho pensional en forma oportuna, y prueba de ello es el reconocimiento a su favor de una DEVOLUCIÓN DE SALDOS a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., por lo que debe concluirse que solo estas tres condiciones del TEST DE PROCEDENCIA están debidamente acreditadas.

No ocurriendo lo mismo con la TERCERA y CUARTA condición pues el referido testigo también le puso en conocimiento al despacho que la actora trabajaba en el DANE al momento de ocurrir el fallecimiento del causante, lo que desdibuja la dependencia económica a la que alude la CONDICIÓN TERCERA del test de procedencia, y sumado a ello, no se practicó ninguna prueba que le permitiese a la Sala inferir que esos recursos propios que recibía la demandante le eran insuficientes para lograr una independencia económica de su cónyuge fallecido.

Y frente a la CUARTA CONDICIÓN, ha de colegirse que se presenta una ausencia total de prueba frente a este tópico, pues de manera alguna se puso en conocimiento del despacho las razones que justificaren la no realización de aportes pensionales en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento del afiliado CLEMENTE OCTAVIO MARINES CASTRO, a sabiendas que el referido testigo dejó en claro que este afiliado murió de forma repentina (infarto) y se encontraba laboralmente activo al momento del fallecimiento.

Es decir, no está probado que este afiliado hubiese estado en una situación personal o de salud, que le impidiera efectuar cotizaciones entre los meses de abril de 2012 y abril de 2015, y si bien el recurrente aduce la existencia de una mora patronal, también refiere que la misma se encuentra

¹ Declaración a partir del minuto 16:40 del archivo multimedia N° 11.

comprendida entre los años 2004 y 2007, es decir, en un periodo muy anterior al de los tres (3) años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Y es por ello que la Sala no accederá a reabrir el debate probatorio en la segunda instancia para solicitar la expedición de una historia laboral más actualizada, pues la demostración de semanas en mora por el periodo comprendido entre los años 2004 y 2007 resulta inane para los fines probatorios de la presente litis.

Así las cosas, al no haberse acreditado el cumplimiento de las cinco (5) condiciones del TEST DE PROCEDENCIA contenido en la sentencia SU-005/18, no resulta factible la aplicación del acuerdo 049 de 1990, para entenderse causada la pensión de sobrevivientes con 300 semanas de cotización antes del 1° de abril de 1994, fecha en que empezó a regir el actual sistema general de pensiones entronizado por la Ley 100 de 1993.

Conforme a las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia **será confirmada íntegramente**.

Costas Procesales de segunda instancia:

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, las costas procesales de la segunda instancia estarán a cargo de dicha parte y a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A., según lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000).

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocida, según lo expuesto en procedencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la señora LILIANA PAREDES LEAL, y a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A., dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$200.000).

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA